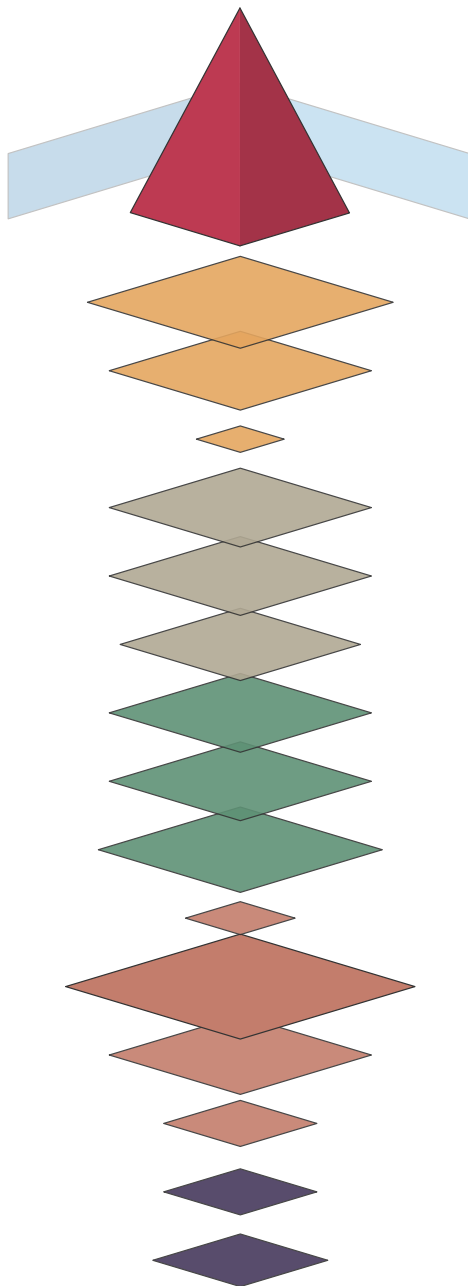



NICARAGUA




5,72
PUNTUACIÓN DE CRIMINALIDAD

63.º de 193 países
15.º de 35 países americanos
6.º de 8 países de América Central


MERCADOS CRIMINALES **5,23**

TRATA DE PERSONAS	7,00
TRÁFICO DE PERSONAS	6,00
EXTORSIÓN Y COBROS ILEGALES POR PROTECCIÓN	2,00
TRÁFICO DE ARMAS	6,00
COMERCIO DE PRODUCTOS FALSIFICADOS	6,00
COMERCIO ILÍCITO DE BIENES DE CONSUMO SUJETOS A IMPUESTOS ESPECIALES	5,50
DELITOS CONTRA LA FLORA	6,00
DELITOS CONTRA LA FAUNA	6,00
DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NO RENOVABLES	6,50
COMERCIO DE HEROÍNA	2,50
COMERCIO DE COCAÍNA	8,00
COMERCIO DE CANNABIS	6,00
COMERCIO DE DROGAS SINTÉTICAS	3,50
DELITOS DEPENDIENTES DE LA CIBERNÉTICA	3,50
DELITOS FINANCIEROS	4,00


ACTORES CRIMINALES **6,20**

GRUPOS DE TIPO MAFIOSO	5,00
REDES CRIMINALES	6,50
ACTORES INTEGRADOS EN EL ESTADO	9,00
ACTORES EXTRANJEROS	6,50
ACTORES DEL SECTOR PRIVADO	4,00


2,08
PUNTUACIÓN DE RESILIENCIA



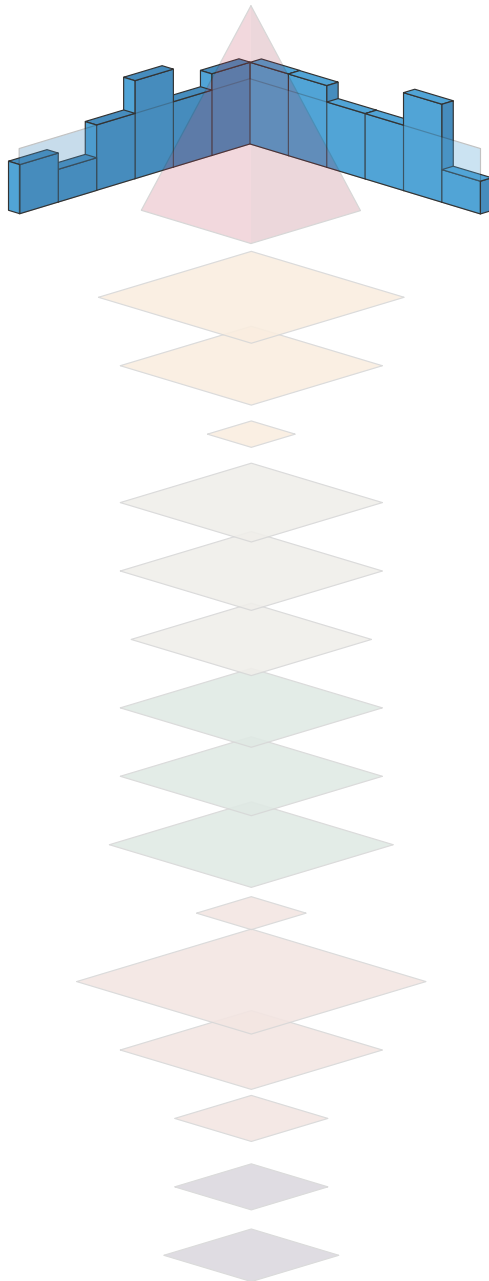
Financiamiento proporcionado por el Gobierno de los Estados Unidos.



Funded by the European Union

ENACT es un programa financiado por la Unión Europea e implementado por el Institute for Security Studies e INTERPOL, en asociación con Global Initiative Against Transnational Organized Crime.

 **NICARAGUA**



 **2,08**
PUNTUACIÓN DE RESILIENCIA

183.º de 193 países
34.º de 35 países americanos
8.º de 8 países de América Central

LIDERAZGO POLÍTICO Y GOBERNANZA	1,50
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS	1,00
COOPERACIÓN INTERNACIONAL	2,00
POLÍTICAS Y LEYES NACIONALES	3,00
SISTEMA JUDICIAL Y DETENCIÓN	2,00
CUERPOS DE SEGURIDAD	2,50
INTEGRIDAD TERRITORIAL	2,50
LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO	2,50
CAPACIDAD DE REGULACIÓN ECONÓMICA	2,00
APOYO A VÍCTIMAS Y TESTIGOS	2,00
PREVENCIÓN	3,00
ACTORES NO ESTATALES	1,00

 **5,72**
PUNTUACIÓN DE CRIMINALIDAD

 MERCADOS CRIMINALES	5,23
 ACTORES CRIMINALES	6,20



Financiamiento proporcionado por el Gobierno de los Estados Unidos.



ENACT es un programa financiado por la Unión Europea e implementado por el Institute for Security Studies e INTERPOL, en asociación con Global Initiative Against Transnational Organized Crime.

CRIMINALIDAD

MERCADOS CRIMINALES

PERSONAS

Nicaragua alberga un notable mercado de trata de personas, que se dirige tanto a nicaragüenses como a extranjeros residentes en el país, incluidas mujeres y niños especialmente vulnerables a la trata nacional y transnacional con fines sexuales. La falta de esfuerzos efectivos de investigación, persecución y prevención, la pobreza rampante y los grandes grupos de personas que carecen de certificados de nacimiento o de cualquier documento de identificación hacen que la situación sea especialmente grave. La trata de mano de obra también es frecuente en los sectores de la agricultura, la construcción, la minería y el servicio doméstico, donde se utilizan las plataformas de las redes sociales para captar víctimas mediante falsas ofertas de trabajo. Los agentes corruptos integrados en el Estado están muy implicados en el mercado de la trata de personas de Nicaragua, que también contribuye a los ingresos del Estado, pero no se ha informado de investigaciones, enjuiciamientos ni condenas impulsados por el Estado relacionados con su implicación.

Nicaragua es un país de origen y tránsito para el tráfico de personas, por el que transitan personas de diversas nacionalidades para llegar a Estados Unidos. A pesar de los esfuerzos del Gobierno por disuadir la migración irregular, las porosas fronteras del país lo han convertido en una ruta internacional clave para quienes buscan asentarse en Estados Unidos. Un número cada vez mayor de nicaragüenses ha huido del país, debido a diversas calamidades, como la pandemia de la COVID-19 y los desastres naturales, y ha buscado refugio en países vecinos, como Costa Rica. En el 2022 aumentó el número de nicaragüenses registrados en la frontera entre Estados Unidos y México. Los oficiales del Ejército nicaragüense, encargados de prevenir la migración irregular y otras formas de actividad delictiva organizada transfronteriza, también facilitan el mercado del contrabando de personas, al aceptar sobornos. Los episodios de extorsión y cobros ilegales por protección cometidos por organizaciones delictivas son escasos en el país.

TRÁFICO

Nicaragua sirve de centro neurálgico para el tráfico de armas en América Central y suministra armas ilegales a países como México, Honduras y Costa Rica. Tanto los actores nacionales como los extranjeros contribuyen a la demanda de armas, ya que dentro de las fronteras nicaragüenses circulan armas no registradas. Muchas de las armas que salen de Nicaragua son reliquias de la guerra civil, anteriormente en posesión de grupos paramilitares

pro gubernamentales. Al parecer, funcionarios corruptos de la Policía y el Ejército nicaragüenses están implicados en la facilitación del transporte transfronterizo ilícito de armas, especialmente hacia el norte, en dirección a México, o hacia el sur, a través de la frontera entre Nicaragua y Costa Rica.

A pesar de contar con un sólido marco jurídico en materia de protección de la propiedad intelectual, Nicaragua no logra prevenir eficazmente los delitos de falsificación, lo que la convierte en objetivo del comercio de productos falsificados. La piratería multimedia, el uso de software sin licencia y la venta de productos falsificados y pirateados han aumentado en los últimos años. La falsificación de cosméticos, perfumes, artículos de cuero y bolsos también es cada vez más frecuente en el país. La falta de informes públicos del Gobierno nicaragüense sobre las incautaciones de productos falsificados limita sustancialmente la comprensión del tamaño y el alcance de este mercado delictivo.

Nicaragua es un país de tránsito para el contrabando de cigarrillos chinos y otras mercancías sujetas a impuestos especiales con destino a países centroamericanos, como Costa Rica. Los productos sujetos a impuestos especiales, incluidos el tabaco y las bebidas alcohólicas, también se introducen de contrabando en Nicaragua para el consumo interno, lo que causa un daño notable a la industria tabacalera legítima del país.

MEDIOAMBIENTE

El mercado de tráfico de madera de Nicaragua prospera gracias a los acuerdos informales entre líderes comunitarios, gobiernos locales, agentes forestales y otros grupos. Aunque los actores nacionales suelen beneficiarse del mercado, la demanda internacional de los consumidores chinos impulsa su carácter altamente consolidado. Los agentes estatales expiden permisos de tala para más madera de la que existe, sobre todo en regiones forestales protegidas, lo que provoca deforestación, principalmente en tierras indígenas o en las regiones del norte o el sur del país. En los últimos años, los grupos criminales nicaragüenses han participado cada vez más en delitos de ecotráfico, lo que ha provocado problemas sociales más amplios, como el aumento de la violencia contra las comunidades indígenas. A pesar de la gravedad de estos problemas, las autoridades nicaragüenses no han priorizado ni asignado recursos para combatir el acaparamiento de tierras, la deforestación y el tráfico de madera e incluso funcionarios policiales y militares de bajo rango suelen aceptar sobornos para no intervenir.

El tráfico de animales salvajes es otro problema frecuente en Nicaragua y los felinos, los loros y las tortugas son las especies más amenazadas. Las redes criminales están muy implicadas en el comercio de mascotas exóticas y venden

loros a clientes hondureños a precios lucrativos. Aunque su consumo es ilegal, las tortugas siguen siendo explotadas por su carne, sus huevos y sus caparazones y el robo de huevos de tortuga es un problema persistente. La venta de especies protegidas en mercados públicos y en los arcenes de las carreteras pone de manifiesto la prevalencia del tráfico de especies silvestres en el país, facilitado por funcionarios corruptos de la Policía y el Ejército.

A lo largo de la frontera entre Nicaragua y Costa Rica se practica la extracción ilícita de oro, lo que supone una amenaza para los ecosistemas protegidos. También hay sospechas de transporte ilícito de oro entre Nicaragua y Venezuela, con oro de origen venezolano que se refina y exporta desde Nicaragua como oro de origen nicaragüense, lo que podría servir como una fuente de ingresos clave para funcionarios corruptos. Además, la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte de Nicaragua es un centro de extracción ilícita de minerales, lo que ha dado lugar a violentos acaparamientos de tierras y a ataques a los defensores del medio ambiente.

DROGAS

No hay indicios de un comercio notable de heroína en Nicaragua. Debido a la pobreza generalizada y al precio relativamente alto de la droga, el consumo interno de heroína sigue siendo bajo. Sin embargo, Nicaragua es un importante país de tránsito para el tráfico de cocaína entre América del Sur y América del Norte. La cocaína de origen colombiano, peruano y boliviano se transporta a través de Nicaragua, que sirve como punto clave para la llegada, el almacenamiento y el transbordo de drogas. Los cárteles de la droga mexicanos también tienen una fuerte presencia en el país. Las redes criminales nicaragüenses colaboran con sus homólogos de Costa Rica y Honduras para el transporte de cocaína, lo que genera importantes ingresos. La corrupción dentro del aparato estatal facilita el mercado del tráfico de cocaína, con acusaciones sobre funcionarios de élite que aceptan sobornos y negocian con los narcotraficantes. Las autoridades nicaragüenses no se comunican ni cooperan con sus homólogos costarricenses en la lucha contra el narcotráfico, lo que facilita las operaciones de tráfico de drogas entre ambos países.

Nicaragua tiene un mercado de cannabis consolidado, que atiende principalmente a la demanda local. Debido a su asequibilidad, la marihuana es la droga más consumida entre los adolescentes. Las redes criminales nicaragüenses facilitan la producción, el transporte y la distribución de marihuana y utilizan estrategias de microcomercialización para vender pequeñas cantidades de droga en las ciudades nicaragüenses. La marihuana producida localmente, así como la procedente de Costa Rica y Honduras, se distribuye y comercializa principalmente en ciudades como Managua, Chinandega, Estelí, Rivas, Puerto Cabezas y Bluefields, donde reside la mayoría de los consumidores.

Aunque el mercado de drogas sintéticas carece de consolidación, está impulsado por mulas nicaragüenses que trafican con ketamina adquirida legalmente, sobre todo en forma líquida, a través de la porosa frontera sur del país, hasta llegar a manos de narcotraficantes costarricenses. Aunque el consumo nacional de ketamina sigue siendo insignificante, su legalidad en Nicaragua facilita el transporte ilícito de la droga a la vecina Costa Rica. También se sabe que las redes delictivas nicaragüenses distribuyen metanfetamina y diversas anfetaminas en los mercados de drogas locales, especialmente en Estelí.

DELITOS DEPENDIENTES DE LA CIBERNÉTICA

Nicaragua está mal equipada para hacer frente a las amenazas cibernéticas. Sin embargo, el mercado ilícito no parece estar particularmente desarrollado en el país hasta el momento. No obstante, se han producido ciberataques dirigidos a instituciones gubernamentales, medios de comunicación y particulares en Nicaragua, que incluyen el pirateo de cuentas de redes sociales pertenecientes a medios en línea independientes, ataques distribuidos de denegación de servicio dirigidos a periódicos, pirateo de cuentas de plataformas de SMS y ciberataques a las bases de datos y sitios web de diversas instituciones públicas.

DELITOS FINANCIEROS

Según las autoridades nicaragüenses, los delitos financieros cibernéticos, como el fraude electrónico y el fraude comercial basado en las redes sociales, son un problema en el país. Se sabe que los estafadores roban datos de clientes corporativos y se hacen pasar por funcionarios de empresas para exigir falsos pagos de deudas. Se ponen en contacto con sus víctimas a través de llamadas telefónicas internacionales, haciéndose pasar por empleados bancarios y recabando su información bancaria personal. Hay indicios de participación transnacional en estos delitos financieros. Nicaragua también sufre pérdidas en los ingresos fiscales anuales, que ascienden a cientos de millones de dólares, debido al abuso fiscal de las empresas.

ACTORES CRIMINALES

El país se ha visto afectado negativamente por la corrupción de alto nivel y los presuntos vínculos entre agentes estatales y grupos delictivos organizados que operan con impunidad. Hay denuncias de que las redes de narcotraficantes operan con la complicidad de las fuerzas de seguridad y otros delincuentes incluso roban cargamentos de drogas ilícitas con la ayuda de funcionarios estatales corruptos. Las acusaciones han avivado las sospechas, ya antiguas, de los vínculos de las élites con los cárteles de la droga, con detenciones de alto nivel de parlamentarios y narcotraficantes que han sido vistos con funcionarios del Gobierno. La colaboración con redes criminales extranjeras también

es habitual, con informes sobre la expansión territorial de los cárteles mexicanos en Nicaragua. Funcionarios de nivel medio y bajo se han visto implicados en el tráfico de madera y especies silvestres y también se sabe que destacados representantes empresariales e institucionales colaboran con actores criminales. Se ha acusado a grupos paramilitares progubernamentales de colaborar con las fuerzas de seguridad del Estado para intimidar y cometer actos violentos contra supuestos enemigos del régimen.

Entidades criminales extranjeras, incluidas varias organizaciones criminales colombianas, venezolanas y costarricenses, operan en toda Nicaragua, dependiendo de actores criminales locales para proporcionar servicios clave, como el transporte y los contactos para facilitar los mercados criminales organizados. Según los informes, estas entidades criminales extranjeras ejercen un control casi total sobre el mercado de tráfico de cocaína del país. Aunque en Nicaragua hay una presencia limitada de grupos de tipo mafioso, los más fuertes prestan servicios especializados

a entidades delictivas transnacionales implicadas en el tráfico de drogas, el tráfico de madera, el tráfico de especies silvestres y otras formas de delincuencia organizada.

Las redes delictivas más pequeñas de Nicaragua también trabajan con contrapartes extranjeras en diversas actividades ilícitas, como la trata de personas, el narcotráfico, el tráfico de madera, el tráfico de vida silvestre y la microcomercialización. Algunas redes se especializan en aspectos concretos del mercado del narcotráfico nicaragüense, como el transporte de drogas a través de América Central, mientras que otras roban cargamentos de droga con la ayuda de funcionarios estatales corruptos.

Las mayores empresas privadas del país están gestionadas y/o son propiedad de élites políticas, lo que suscita preocupación, por la existencia de una red empresarial conocida por utilizar fondos estatales a través de contratos con instituciones públicas. Las ventajas obtenidas a cambio de estas concesiones ponen de manifiesto la corrupción rampante en el sector privado. También se ha descubierto que algunas de estas empresas están implicadas en tramas de blanqueo de dinero.

RESILIENCIA

LIDERAZGO Y GOBERNANZA

Nicaragua se encuentra actualmente en un estado de crisis política y económica y solo un pequeño porcentaje de la población expresa su apoyo al régimen. El partido político gobernante ha sido acusado de tener vínculos con el narcotráfico transnacional y las iniciativas estatales contra el crimen organizado solo se consideran simbólicas. Las violaciones de los derechos humanos han ido en aumento, los presos políticos siguen encarcelados injustamente y los candidatos de la oposición se enfrentan a detenciones arbitrarias. La credibilidad del Gobierno nicaragüense también se ha visto empañada por el blanqueo de dinero, la malversación de fondos y la explotación de la legislación sobre ciberdelincuencia para acusar de delitos financieros a los líderes políticos de la oposición. Se ha denunciado que la corrupción de alto nivel vinculada a la élite política impregna todo el aparato estatal nicaragüense, lo que ha suscitado preocupación por los ataques políticos contra individuos y entidades reguladoras de mayor envergadura. El avasallamiento de los poderes del Estado por parte del Ejecutivo ha llevado al desmantelamiento de las instituciones y representa un retroceso significativo en materia de transparencia y rendición de cuentas.

Nicaragua es parte de tratados y convenciones internacionales relacionados con el crimen organizado y tiene acuerdos de extradición con varios países. Sin embargo, el Gobierno se ha enfrentado a críticas por conceder la nacionalidad

nicaragüense a personas extranjeras que se enfrentan a cargos de corrupción y otros delitos en los tribunales de sus países, para eludir los requisitos legales de extradición. Nicaragua ha colaborado con diversas entidades internacionales para combatir el crimen organizado, pero ha sido ampliamente condenada en el ámbito internacional. Estados Unidos y la UE han impuesto sanciones a altos funcionarios nicaragüenses. Nicaragua cuenta con un marco legislativo relativamente sólido contra la mayoría de las formas de delincuencia organizada, pero carece de una legislación adecuada contra delitos medioambientales, como la extracción ilícita de oro, el tráfico de madera y el tráfico de especies silvestres. Además, el país no cuenta con una normativa o una infraestructura eficaz para combatir los delitos cibernéticos. La corrupción de alto nivel y la violencia vinculada al régimen han hecho que la legislación contra el crimen organizado sea en gran medida simbólica. La adopción en Nicaragua de la cadena perpetua como pena para los delitos motivados por el odio se ha considerado en general un intento de silenciar a la oposición política al régimen, junto con la adopción de legislación que limita las organizaciones locales de derechos humanos y políticas.

JUSTICIA PENAL Y SEGURIDAD

El sistema judicial de Nicaragua es débil, está muy influido por la política y es corrupto. La mayoría de los jueces están afiliados al partido gobernante y se sabe que aceptan

sobornos de narcotraficantes a cambio de favores judiciales. La creciente instrumentalización del sistema judicial por parte del Gobierno contra los opositores políticos ha dado lugar a la revocación de la legalidad de los partidos políticos de la oposición y al encarcelamiento injusto de sus miembros, lo que ha provocado una crítica generalizada a la reelección presidencial en el 2021. La disposición de los funcionarios judiciales nicaragüenses a socavar la democracia y a cometer graves violaciones de los derechos humanos ha llevado a Gobiernos extranjeros a imponerles sanciones. Más de la mitad de la población reclusa total de Nicaragua está encarcelada por delitos relacionados con las drogas y el sistema penitenciario está gravemente superpoblado, con condiciones de vida extremadamente deficientes. Los grupos delictivos suelen sobornar a funcionarios de prisiones corruptos y operan desde dentro del sistema penitenciario.

Las fuerzas de seguridad nicaragüenses se consideran herramientas de represión política y a menudo colaboran con grupos paramilitares progubernamentales para atacar a defensores de los derechos humanos, periodistas independientes y activistas disidentes. El Ejército nicaragüense, que antes era elogiado por su eficacia en las incautaciones de drogas y los programas comunitarios, ha sido acusado de corrupción, detenciones arbitrarias, tortura y colaboración con grupos paramilitares. El presupuesto anual de la Policía ha aumentado, lo que lleva a algunos a considerarlo una recompensa por la lealtad a la élite gobernante.

Las fronteras del Pacífico y el Caribe, con un terreno difícil y puntos ciegos, proporcionan importantes ventajas topográficas para la delincuencia organizada transnacional. Los narcotraficantes, a menudo con la ayuda de funcionarios estatales corruptos, aprovechan ampliamente las remotas costas e islas nicaragüenses para transportar drogas a través del país. Las operaciones regionales de tráfico de cocaína y blanqueo de dinero pasan con frecuencia por territorio nicaragüense. La corrupción de alto nivel no solo facilita el crimen organizado transfronterizo, sino que también dificulta la medición del alcance de los mercados criminales organizados de Nicaragua. Tras años de ciberataques contra instituciones estatales, las autoridades nicaragüenses y rusas acordaron colaborar en el desarrollo de infraestructuras virtuales para proteger la seguridad nacional.

ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO

Nicaragua está considerado uno de los países del mundo con mayor riesgo de blanqueo de dinero y financiación del terrorismo. A pesar de algunas mejoras, las iniciativas del país contra el blanqueo de capitales están dirigidas, según se informa, contra la oposición política al partido gobernante. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) ha sido criticada por su lenguaje impreciso, que podría aprovecharse para calificar de terrorismo las manifestaciones públicas, y por permitir que el Ejército nicaragüense vigile las instituciones

bancarias nacionales. Aunque la ley establece procedimientos de confiscación tras la incautación de fondos y activos de origen delictivo, estos procedimientos rara vez se aplican. En consecuencia, Nicaragua ha sido incluida en la lista gris internacional, debido a su falta de fiabilidad y a su alto potencial para el blanqueo de dinero.

La corrupción desenfrenada, el favoritismo y la impunidad entre los funcionarios nicaragüenses, exacerbados por la escasa capacidad para hacer cumplir la ley, constituyen elementos disuasorios considerables para los inversores extranjeros. Además, Nicaragua ha caído en un profundo estado de crisis política y económica, desde el estallido y la brutal represión de las protestas por la reforma de la seguridad social. Esta crisis, agravada en los últimos años por la COVID-19, el aumento de la pobreza y el desempleo vinculado a la pandemia, ha provocado que muchas empresas extranjeras abandonen el país. La extorsión, los pagos de facilitación y las comisiones ilegales también asolan el sistema de regulación económica de Nicaragua. Los funcionarios fiscales y de aduanas no solo aplican la normativa nacional de forma arbitraria, sino que también incurrir en sobornos y corrupción, lo que crea un entorno empresarial difícil para las empresas extranjeras. Más recientemente, el mayor aislamiento del régimen en la escena internacional ha exacerbado los problemas mencionados y ha desencadenado un aumento significativo de la accesibilidad de la financiación criminal.

SOCIEDAD CIVIL Y PROTECCIÓN SOCIAL

Aunque las políticas de Nicaragua establecen procedimientos para la identificación y la asistencia de las víctimas, las autoridades rara vez los aplican. El Gobierno no ha establecido refugios ni asignado fondos para servicios especializados para las víctimas, con esfuerzos mínimos de apoyo en marcha. A pesar de permitir la concesión de visados humanitarios a víctimas extranjeras de trata de personas, el Gobierno no ha identificado a ninguna víctima extranjera desde el 2018.

El marco legislativo nicaragüense contra el crimen organizado incluye medidas preventivas, como programas de concienciación y educación pública, pero no se aplican correctamente. Las estrategias de divulgación pública, como los folletos dirigidos y los segmentos radiofónicos, tienen una eficacia limitada y se carece de datos fiables sobre el consumo de drogas, lo que dificulta el análisis de los programas de prevención de drogas. Los servicios de prevención y tratamiento de la drogodependencia apenas se utilizan, posiblemente debido a la falta de concienciación o a una capacidad operativa limitada.

El régimen nicaragüense ha sido criticado por sus restricciones a la libertad de prensa y su actitud represiva hacia los medios de comunicación independientes. Los periodistas y los empleados de los medios sufren acoso físico y judicial, detenciones arbitrarias y falsas acusaciones de calumnia y difamación. Muchos medios de comunicación del país son

propiedad o están controlados por aliados políticos del régimen. Las organizaciones de la sociedad civil también denuncian que son objeto de acoso, violencia y medidas legislativas dirigidas a limitar sus actividades. Las ONG y los medios de comunicación independientes, que documentan y denuncian violaciones de derechos humanos en Nicaragua, han sido despojados de su legalidad y se cree que más de mil organizaciones han sido clausuradas o enviadas al exilio. La desaparición de grupos humanitarios, de desarrollo y prodemocráticos ha tenido graves repercusiones en las poblaciones locales y las comunidades indígenas son muy vulnerables al robo de tierras y a la violencia de los colonos. En el 2022 se identificó a Nicaragua como el país con la mayor tasa per cápita de asesinatos de defensores de la tierra y el medio ambiente de todo el mundo.

Este resumen ha sido financiado en parte por una subvención del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Las opiniones, los hallazgos y las conclusiones expresados en este documento pertenecen a los autores y no necesariamente reflejan los del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

